



**Excma. Sra. D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Jesús Montero Cuadrado**  
Consejera de Hacienda y Administración Pública  
Junta de Andalucía

Madrid, a 3 de agosto de 2016

Estimada Consejera,

El pasado 6 de abril se remitió comunicación por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual, se activaban para la comunidad las medidas coercitivas previstas en el artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, relativas a la aprobación de la no disponibilidad de créditos y a la retención de los mismos que garantizara el cumplimiento del objetivo establecido. Así mismo, se indicaba que la financiación adicional del ejercicio 2016, a la que dicha comunicación hacía referencia, facilitaría a la comunidad la atención de la no disponibilidad solicitada y el cumplimiento de la regla de gasto, sin determinar necesariamente una reducción del gasto en relación con lo ejecutado en el ejercicio anterior.

En el Plan de ajuste que se acordó con la comunidad para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2016 se concretó que resultaba innecesario la adopción de dichos acuerdos de no disponibilidad, a la vista del conjunto de medidas y escenarios relativos a la evolución financiera del ejercicio 2016, compatibles con el objetivo de estabilidad del -0,7% incorporado en el Programa de Estabilidad comunicado a las instituciones europeas.

Por otro lado, con posterioridad la comunidad ha remitido un Plan Económico – Financiero para los ejercicios 2016 – 2017 en el que no se contiene información completa en relación al cumplimiento de la regla de gasto para dichos ejercicios. A este respecto, debe indicarse que en el informe elaborado por la AIREF sobre el citado plan se señala que “La información facilitada en el PEF sobre esta regla no es completa, por lo que no se pueden valorar las previsiones de la comunidad. Si bien, teniendo en cuenta el crecimiento del gasto previsto en su escenario presupuestario, la aplicación de la regla de gasto podría exigir una evolución del gasto más restrictiva que el cumplimiento de la previsión de déficit de la comunidad para 2016 y 2017.”



Sin perjuicio de la necesidad de completar la información indicada sobre la regla de gasto en el Plan Económico – Financiero remitido, resulta oportuno indicar que según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, relativos al mes de mayo, en relación al comportamiento del gasto computable a efectos de la valoración de dicha regla, se observa un crecimiento interanual del 5,4%, que evidencia la existencia de riesgos de posibles desviaciones sobre la tasa de referencia establecida para el conjunto del año en el 1,8%.

De igual manera, en el último informe emitido por la AIREF sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las Administraciones Públicas, se “estima que existe un riesgo claro de incumplimiento de la regla de gasto en 2016 para Andalucía, debido a la evolución del gasto prevista por la CA en su escenario, confirmado con los datos hasta la fecha. El riesgo ya apreciado en el análisis de presupuesto inicial se agrava con la revisión al alza por la CA de los gastos autonómicos que se refleja en la ejecución de los mismos hasta la fecha. El gasto computable estimado para 2016 crece un 6% respecto al nivel de cumplimiento de 2015.”

Atendiendo al momento del ejercicio presupuestario en el que nos encontramos resulta de especial trascendencia la activación de las medidas necesarias para procurar el cumplimiento de la regla de gasto y del plan de ajuste.

A la vista de lo expuesto anteriormente, quedamos a la espera de la remisión de una actualización del plan económico – financiero y de sus archivos anexos, con la información completa en relación al cumplimiento previsto de la regla de gasto, así como de la información adicional que se considere oportuna a efectos de acreditar si se va a cumplir en este ejercicio o no con dicha regla, atendiendo a los datos actualmente disponibles.

Por último, quiero trasladarte la importancia en la adopción de las decisiones necesarias que permitan el cumplimiento de los compromisos asumidos a este respecto, así como las implicaciones que su incumplimiento determina para cada una de las Administraciones Públicas, en virtud del principio de responsabilidad regulado en el artículo 8 de la LOEPSF, conforme al cual cada Administración Pública asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos





por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales, y que ha sido objeto de desarrollo conforme a lo previsto en el Real Decreto 515/2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE.

Sin otro particular, con el convencimiento de que la comunidad llevará a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento del conjunto de objetivos establecidos para el ejercicio corriente, recibe un cordial saludo.

Atentamente,



Antonio Beteta Barreda